

---

*Radical Radio y otros vs. Chirilagua*

**ESTADO**

---

## 2) Índice

	Página
1) Portada.....	i
2) Índice.....	ii
3) Bibliografía.....	iv
3.a) Libros y Documentos Legales.....	iv
3.a.i) Libros.....	iv
3.a.ii) Documentos legales.....	v
3.b) Casos Legales.....	vi
3.b.i) Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	vi
3.b.i.1) Casos contenciosos.....	vi
3.b.i.2) Opiniones Consultivas.....	xi
3.b.ii) Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	xii
3.b.iii) Tribunal Europeo de Derechos Humanos .....	xiii
3.b.iv) Comité de Derechos Humanos.....	xiv
3.b.v) Corte Internacional de Justicia.....	xiv
3.b.vi) Tribunal Penal Internacional para Ruanda.....	xiv
4) Exposición de los hechos.....	1
5) Análisis legal del caso.....	4
5.1) Competencia de la Corte.....	4
5.2) Cuestiones de admisibilidad.....	5
5.3) Alegatos sobre el fondo.....	7
5.3.1) Chirilagua no violó el artículo 13 en relación al artículo 1.1 de la Convención.....	7
a. Respecto del proceso penal seguido por el delito de hurto de bienes del Estado.....	10
b. Respecto del proceso penal seguido por el delito de instigación a delinquir.....	11

c. Respecto del proceso penal seguido por el delito de difamación.....	13
a. Respecto del proceso penal seguido por el delito de homicidio.....	14
5.3.2) Chirilagua no violó los artículos 8 y 25 en relación al artículo 1.1 de la Convención.....	16
a. Existen recursos sencillos, rápidos y efectivos .....	17
b. Los procesos se siguieron ante tribunales competentes.....	20
c. El Estado materializó las garantías del debido proceso.....	22
5.3.3) Chirilagua no violó el artículo 7 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.....	25
5.3.4) Chirilagua no violó el artículo 21 en relación con el artículo 13 y 1.1 de la Convención.....	27
5.3.5) Chirilagua no violó el artículo 24 en relación con los artículos 13 y 1.1 de la Convención.....	28
6) Petitorio.....	30

### **3) Bibliografía**

#### **3.a) Libros y Documentos Legales**

##### **3.a.i) Libros**

- BONILLA, Jorge y Tamayo, Camilo. Las violencias en los medios, los medios en las violencias. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular, 2007.
- BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Segunda edición. Barcelona: Ariel, 1991.
- CALDERÓN CERESO, Ángel. y CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. Manual de Derecho Penal II. Parte Especial. Madrid: Ediciones Deusto, 2005.
- CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Curso de Derecho Internacional Público. Madrid: Editorial Tecnos, 1992.
- FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004.
- FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. Los límites de la Libertad de Expresión. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.
- MEDINA QUIROGA, Cecilia. La Convención Americana: teoría y jurisprudencia. Santiago de Chile: Centro de Derechos Humanos, 2005.
- MEDINA QUIROGA, Cecilia y Claudio Nash Rojas. Sistema interamericano de derechos humanos: introducción a sus mecanismos de protección. Santiago de Chile: Universidad de Chile y Centro de Derechos Humanos, 2007.
- ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del delito. Madrid: Civitas, 1997.
- ZEPEDA, José y FERNANDEZ, Benjamín. La radio. Entre la comunicación y el poder. Holanda: Radios Nederland Wereldomroep, 2009.

### 3.a.ii) Documentos legales

- Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009.
- Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, el Reglamento de la Comisión), aprobado por la Comisión en su 137º período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009.
- CIDH. Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2008. OEA/Ser./L/V/II.134, doc. 5 rev.1, 25 de febrero de 2009.
- Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión en Informe Anual de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2004.
- Informe sobre terrorismo y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1 corr., 22 de octubre de 2002.
- Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión durante su 108º período de sesiones en octubre del año 2000.
- Convención Interamericana contra la Corrupción del 29 de marzo de 1996.
- Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, A.G. res. 43/173, anexo, 43 U.N. GAOR Supp. (No. 49) p. 298, ONU Doc. A/43/49 (1988).
- Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Banjul) de 1981.
- Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.
- Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331.
- Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966.

- Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
- Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

### **3.b) Casos Legales**

#### **3.b.i) Corte Interamericana de Derechos Humanos**

##### **3.b.i.1) Casos contenciosos**

- Corte IDH. *Caso Usón Ramirez*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre de 2009. Serie C No 207.
- Corte IDH. *Caso Barreto Leiva*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206.
- Corte IDH. *Caso Kawas Fernández*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196.
- Corte IDH. *Caso Perozo y otros*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195.
- Corte IDH. Corte IDH. *Caso Tristán Donoso*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193.
- Corte IDH. *Caso Heliodoro Portugal v. Panamá*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186.
- Corte IDH. Corte IDH. *Caso Castañeda Gutman*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184.
- Corte IDH. *Caso Apitz Barbera y otros*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de agosto de 2008. Serie C No 182.

- Corte IDH. *Caso Chiriboga v. Ecuador*. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179.
- Corte IDH. *Caso Barreto Leiva*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206.
- Corte IDH. *Caso Bayarri*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187.
- Corte IDH. *Caso Kimel*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de mayo de 2008. Serie C No 177.
- Corte IDH. *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170.
- Corte IDH. *Caso Zambrano Vélez y otros*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166.
- Corte IDH. *Caso Nogueira de Carvalho y otro*. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de Noviembre de 2006. Serie C No. 161.
- Corte IDH. *Caso Masacre de Pueblo Bello*. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de enero de 2006. Serie C No 140.
- Corte IDH. *Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz v. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167.
- Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela v. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163.
- Corte IDH. *Caso del Penal Miguel Castro Castro v. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160.
- Corte IDH. *Caso Ximenes Lopes*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 4 de julio de 2006. Serie C No 149.

- Corte IDH. *Caso Baldeón García*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 6 de abril de 2006. Serie C No 147.
- Corte IDH. *Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158, p. 14.
- Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151.
- Corte IDH. *Caso López Álvarez*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141.
- Corte IDH. *Caso García Asto y Ramírez Rojas*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137.
- Corte IDH. *Caso Gómez Palomino*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136.
- Corte IDH. *Caso Palamara Iribarne v. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, p. 7.
- Corte IDH. *Caso de las Niñas Yean y Bosico*. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 61; Corte IDH.
- Corte IDH. *Caso de la Comunidad Moiwana*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparación y Costas. Sentencia del 15 de junio de 2005. Serie C No 124.
- Corte IDH. *Caso Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay*. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125.
- Corte IDH. *Caso de las Hermanas Serrano Cruz*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1 de marzo de 2005. Serie C No 120.
- *Caso de las Hermanas Serrano Cruz*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 135.



- Corte IDH. *Caso Ricardo Canese v. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111.
- Corte IDH. *Caso 19 Comerciantes*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109.
- Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.
- Corte IDH. *Caso Myrna Mack Chang*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101.
- Corte IDH. *Caso Bulacio*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100.
- Corte IDH. *Caso Juan Humberto Sánchez*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 9982.
- Corte IDH. *Caso Cinco Pensionistas*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de febrero de 2003. Serie C No 48.
- Corte IDH. *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94.
- Corte IDH. *Caso Cantos*. Excepciones Preliminares. Sentencia del 7 de septiembre de 2001. Serie C No 85.
- Corte IDH. *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79.
- Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74.
- Corte IDH. *Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros)*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de febrero de 2001. Serie C No 73.

- Corte IDH. *Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72.
- Corte IDH. *Caso del Tribunal Constitucional v. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71.
- Corte IDH. *Caso Cantoral Benavides*. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69.
- Corte IDH. *Caso y Ugarte*. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68.
- Corte IDH. *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) v. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.
- Corte IDH. *Caso Cesti Hurtado*. Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56.
- Corte IDH. *Caso Castillo Petruzzi y otros*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C No. 52.
- Corte IDH. *Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros)*. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37.
- Corte IDH. *Caso Blake*. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36.
- Corte IDH. *Caso Suárez Rosero*. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35.
- Corte IDH. *Caso Castillo Paez*. Fondo. Sentencia del 3 de noviembre de 1997. Serie C No 34.
- Corte IDH. *Caso Genie Lacayo v. Nicaragua*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30.
- Corte IDH. *Caso Caballero Delgado y Santana*. Fondo. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No 22.

- Corte IDH. *Caso Neira Alegría y otros*. Fondo. Sentencia del 19 de enero de 1995. Serie C No 20
- Corte IDH. *Caso Gangaram Panday*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16.
- Corte IDH. *Caso Godínez Cruz*. Fondo. Sentencia del 20 de enero de 1989. Serie C No 5.
- Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez*. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4.

### **3.b.i.2) Opiniones Consultivas**

- *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de setiembre de 2003.
- *Garantías Judiciales en Estados de Emergencia* (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9.
- *El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías* (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, p. 10 y 11.
- *La Colegiación Obligatoria de Periodistas* (Arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos)”. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A N° 5.

### **3.b.ii) Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

- *Víctor Sánchez vs. Estados Unidos*, 27 de octubre de 2005.

- *José Luis Forzanni Ballardo vs. Perú*. Informe No. 40/05, Caso 12.139, 9 de marzo de 2005.
- *Mario Alfredo Lares-Reyes et al. vs. Estados Unidos*, Informe Anual 2002.
- *Tomás E. Carvallo Quintana vs. Argentina*. Caso 11.859, Informe No. 67/01, 14 de junio de 2001.
- *Gray Graham vs. Estados Unidos*. Informe No. 51/100, Caso 11.193, Informe Anual, 2000.
- *Ramón Martínez Villareal vs. Estados Unidos*. Caso 11.573, Informe Anual 2000.
- *Bendeck-Cohdinsa vs. Honduras*. Informe No. 106/99, 27 de septiembre de 1999.
- *Bernard Merens y familia vs. Argentina*. Informe No. 103/99, 27 de septiembre de 1999.
- *Petición MEVOPAL S.A. vs. Argentina*. Informe No. 39/99, 11 de marzo de 1999.
- *Tabacalera Boquerón S.A. vs. Paraguay*. Informe No. 47/97, 18 de octubre de 1997.
- *Banco de Lima vs. Perú*. Informe No. 10/91, Caso 10.169, 22 de febrero de 1991.

### **3.b.iii) Tribunal Europeo de Derechos Humanos**

- TEDH. *Gropera Radio AG and Others v. Switzerland*, Judgment, 28 march 1990.
- TEDH. *Pine Valley Developments Ltd and Others vs. Ireland*, Judgment, 29 November 1991.
- TEDH. *Scharsach and News Verlagsgesellschaft v. Austria*, no. 39394/98, Judgment, 13 november 2003.
- TEDH. *Perna v. Italy*, no.48898/98, Judgment, 6 may 2003.
- TEDH. *Dichand and others v. Austria*, no. 29271/95, Judgment, 26 February 2002.
- TEDH. *Case of Lehideux and Isorni v. France*, no. 24662/94, Judgment, 23 September, 1998.

- TEDH. *Case of Otto-Preminger-Institut v. Austria*, no. 13470/87, Judgment, 20 September, 1994.
- TEDH. *Case of Castells v. Spain*, Judgment, 23 April, 1992.
- TEDH. *Case of Oberschlick v. Austria*, Judgment, 25 April, 1991.
- TEDH *Case of Müller and Others v. Switzerland*, Judgment, 24 May, 1988.
- TEDH., *Case of Lingens v. Austria*, Judgment of 8 July, 1986.
- TEDH., *Case of Barthold v. Germany*, Judgment of 25 March, 1985.
- TEDH., *Case of The Sunday Times v. United Kingdom*, Judgment of 29 March, 1979.
- TEDH., *Case of Handyside v. United Kingdom*, Judgment of 7 December, 1976.
- TEDH. *Caso Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Bélgica*, Judgment, 2 march 1987.
- TEDH. *Castells v. Spain*, no. 11798/85, Judgment, 23 April 1992.

### **3.b.iv) Comité de Derechos Humanos**

- *Michelle Lamagna vs. Australia*. Comunicación No. 737/1997, U.N. Doc. CCPR/C/65/D/737/1997, 30 de abril de 1999.
- *Sharif Mohamed vs. Barbados*. Comunicación No. 502/1992, U.N. Doc. CCPR/C/50/D/502/1992, 4 de abril de 1994.
- *Observación General No. 10*, Artículo 19 - Libertad de opinión, 19º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (1983).

### **3.b.v) Corte Internacional de Justicia**

- *Barcelona Traction, Light and Power Company*, Judgment, I.C.J. Reports 1970.

### **3.b.vi) Tribunal Penal Internacional para Ruanda**

- The Prosecutor vs. Ferdinand Nahimana, Jean – Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze. Case No. ICTR-99-52-T, 3 december 2003

#### **4) Exposición de los hechos**

1. Chirilagua es un Estado federal, catalogado fiscalmente como de renta media alta, que cuenta con un sistema de gobierno democrático estable y es parte de todos los tratados interamericanos de derechos humanos y de los principales tratados de derechos humanos del sistema universal. Desde el año 2006, asumió la Presidencia de la República el señor Atilio Escalante Norris (en adelante, el Presidente Escalante), quien contó con el apoyo del 60% de la población.
2. En el marco de las elecciones generales para diputados federales programadas para el 10 de marzo de 2008, el partido oficialista propuso activar un mecanismo de consulta popular, conocido como la “Papeleta de la Democracia” (en adelante, la Papeleta), que consistía en que los ciudadanos que estaban a favor de la continuación del Presidente Escalante en el gobierno incluyeran en las urnas una papeleta adicional. El resultado de dicha consulta no era legalmente vinculante, pues ésta no es un procedimiento válido de reforma constitucional.
3. El partido de oposición y otros sectores de opinión se resistieron a la propuesta. Dos meses antes de las elecciones, a través de la red social Facebook, un grupo de estudiantes convocó a una marcha nacional e internacional en contra de la Papeleta, conocida popularmente como “el Facebookazo” (en adelante, la marcha o el Facebookazo), a realizarse el 3 de marzo de 2008.
4. El primer medio masivo en apoyar la marcha fue Radical Radio, cuyo programa de mayor audiencia era conducido por el locutor, periodista e imitador William Garra (en adelante, el señor Garra), quien caracterizaba al Presidente Escalante por medio de su imitación más polémica: “Fatilio Estafante”. Dicho personaje era constantemente ridiculizado y señalado como “señorito feudal, bueno para nada, insensible, voraz y corrupto”, por lo que algunos

sectores de opinión acusaron al programa del señor Garra de promover el odio entre clases y los conflictos sociales por la disputa de tierras.

5. Como producto de un convenio de cooperación celebrado en el 2002 entre Radical Radio, bajo la dirección de Melanie Pereira (en adelante, la señora Pereira), y Radio Su-Versión, emisora ilegal bajo la dirección de Francis Hoffman (en adelante, el señor Hoffman), ésta última emisora retransmitía programas de la primera y, en algunas oportunidades, transmitían “en cadena”.
6. A través de ambos medios, la población de San Pedro de los Aguados tuvo conocimiento del Facebookazo. Días antes de su realización se dedicó un programa sobre aproximadamente 50 grupos de la red social de Facebook que hacían referencia al Presidente Escalante, cuyo contenido era agresivo y crítico, entre los que se incluían los siguientes: “Apuesto a que encuentro un millón de personas que odien al burgués de Atilio Escalante Norris”, “Los que odiamos, repudiamos y aborrecemos a Atilio Escalante Norris”, “Yo también quiero que se muera Atilio Escalante Norris y todos los terratenientes que nos han explotado”, “La marcha es un bomba dirigible a Atilio Escalante Norris” y “¿Qué porcentaje de chirilagüenses patearía a Atilio Escalante Norris si se lo encontrara?”. Dicho programa contó con llamadas “al aire” de personas que respaldaban dichos contenidos y finalizó con una invitación a participar en la marcha.
7. El día del Facebookazo, el señor Garra denunció la supuesta interrupción de la marcha en San Pedro de los Aguados y alentó a los participantes a que defendieran sus derechos “a toda costa”. Producto de los enfrentamientos entre los manifestantes y los seguidores del Presidente Escalante, así como entre los marchantes y los miembros de la Guardia Federal, fallecieron 6 personas y 15 más resultaron heridas.
8. Durante la semana siguiente, Radical Radio y Radio Su-Versión denunciaron los hechos como un ataque al pueblo y, el día de las elecciones, 10 de marzo de 2008, se denunció



un “fraude monumental”, invitándose a sus ciudadanos a que “no se dejaran amedrentar y protegiera sus derechos constitucionales”. Una vez más, producto de los disturbios entre opositores y oficialistas, fallecieron 3 personas.

9. La Comisión Federal de Regulación de Telecomunicaciones (en adelante, COFERETEL) inició una revisión de las concesiones de radio y televisión, a fin de formular una política que garantice la igualdad de oportunidades y el pluralismo informativo. Luego de un mes de haber solicitado la actualización de datos y requisitos de ley a los medios concesionados, la COFERETEL dispuso la cancelación de las concesiones otorgadas y la orden de cese inmediato de las actividades de 40 emisoras de radio, entre las que se encontraba Radical Radio. Asimismo, ordenó el cierre inmediato de todas las emisoras ilegales y la confiscación de sus equipos, entre las que se encontraba Radio Su-Versión.
10. El Ministerio Público investigó e imputó a más de 30 personas por la presunta comisión del delito de hurto de bienes del Estado, entre los que se incluyó a los sres. Pereira, Hoffman y Byron Dayle (en adelante, señor Dayle), uno de los representantes legales de Radical Radio. Del mismo modo, imputó a las tres personas mencionadas por la presunta comisión de los delitos de instigación a delinquir y difamación. Por último, imputó al señor Garra la presunta comisión de los delitos de instigación a delinquir, difamación y homicidio en perjuicio de dos civiles y un policía, ocurridas el 3 de marzo de 2008.
11. Luego de la acusación formal del Ministerio Público por los delitos imputados a los señores Pereira, Hoffman, Dayle y Garra (en adelante, las presuntas víctimas) ante las instancias judiciales competentes, los procesos penales transcurrieron hasta finalizar por medio de sentencias firmes. El señor Dayle fue absuelto y sobreseído en todos los procesos iniciados en su contra.

## 5) Análisis legal del caso

### 5.1) Competencia de la Corte

12. El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la Convención) y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte) el 9 de abril de 1980<sup>1</sup>, con lo que ésta es competente *ratione temporis*, *ratione loci* y *ratione materia* para conocer el presente caso. Sin perjuicio de ello, el Estado precisará lo alegado en el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Comisión) respecto al único extremo reiterado en el escrito autónomo de las presuntas víctimas, que consideró también a Radical Radio y Radio Su-Versión como víctimas; siendo que éstas no ratificaron lo alegado respecto de los artículos 7, 21 y 24 de la Convención. Pese a ello, el Estado se referirá a los mismos en su momento.
13. Ante la Comisión, el Estado planteó una **excepción de incompetencia *ratione personae*** en tanto las personas jurídicas no se encuentran protegidas por la Convención<sup>2</sup>. Tal afirmación no pretendía evitar un análisis de fondo sobre los derechos de las personas naturales alegados en la petición, pues, siguiendo lo señalado por esta Corte en el *Caso Cantos*<sup>3</sup>, el Estado considera que, en general, pueden efectuarse violaciones a los derechos humanos a través de ficciones jurídicas como las personas jurídicas y que ello, ciertamente, conduciría a resultados irrazonables<sup>4</sup> y no queridos por la Convención<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Véase las *Respuestas a las preguntas del Caso*, p. 2.

<sup>2</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH). *José Luis Forzanni Ballard vs. Perú*. Informe No. 40/05, Caso 12.139, 9 de marzo de 2005, párr. 35; CIDH. *Petición MEVOPAL S.A. vs. Argentina*. Informe No. 39/99, 11 de marzo de 1999, párr. 20; CIDH. *Tabacalera Boquerón S.A. vs. Paraguay*. Informe No. 47/97, 18 de octubre de 1997, párr. 25; y CIDH, *Banco de Lima vs. Perú*. Informe No. 10/91, Caso 10.169, 22 de febrero de 1991, párr. 1 y 2.

<sup>3</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH), *Caso Cantos*. Excepciones Preliminares. Sentencia del 7 de septiembre de 2001, párr. 26-28.

<sup>4</sup> Véase el artículo 32.b de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, en vigor desde el 27 de enero de 1980 (en adelante, la Convención de Viena) y FAÜNDEZ LEDESMA, Héctor. *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos*

14. Sin embargo, esto último no debe entenderse como el reconocimiento de Radical Radio y Radio Su-Versión como presuntas víctimas para ningún efecto, ya que el artículo 1.2 de la Convención es claro cuando dispone que “persona es todo ser humano” y el nuevo Reglamento de la Corte así lo confirma<sup>6</sup>. Más aún si en el informe de la Comisión ya se ha determinado, por derecho propio, a las personas naturales que habrían sido afectadas a través de las emisoras en cuestión, los señores Dayle, Pereira, Hoffman y Garra; por lo que el Estado se ratifica en considerar únicamente a estas últimas como presuntas víctimas.

## 5.2) Cuestiones de admisibilidad

15. De acuerdo con la Convención<sup>7</sup>, para que una petición pueda ser admitida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se requiere que se haya interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. En el caso *sub judice*, en la debida oportunidad ante la Comisión<sup>8</sup>, el Estado sostuvo que existía una acción en lo contencioso administrativo pendiente de resolución, la misma que fue interpuesta por el señor Dayle, en representación de Radical Radio.

---

*Humanos. Aspectos institucionales y procesales*. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, p. 255.

<sup>5</sup> Véase el artículo 29.a de la Convención.

<sup>6</sup> Véase el artículo 2.25 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, el Reglamento de la Corte), aprobado por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009, que entró en vigor el 1 de enero de 2010.

<sup>7</sup> Véase el artículo 46.1.a de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (en adelante, la Convención) y, en ese sentido, los artículos 28.h y 31.1 del nuevo Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, el Reglamento de la Comisión), aprobado por la Comisión en su 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009.

<sup>8</sup> Corte IDH. *Caso Nogueira de Carvalho y otro*. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de Noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 51; Corte IDH. *Caso García Asto y Ramírez Rojas*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 49; Corte IDH. *Caso de las Niñas Yean y Bosico*. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 61; Corte IDH. *Caso de las Hermanas Serrano Cruz*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 135.

16. Al respecto, si bien la Comisión<sup>9</sup> y esta Corte<sup>10</sup> han señalado que debe haber sido la persona natural la que haya agotado los recursos internos, en defensa de sus propios derechos, con ocasión de la afectación a la persona jurídica (por ejemplo, en su calidad de accionista<sup>11</sup>), el Estado formuló dicha **excepción por falta de agotamiento de los recursos internos** siguiendo la lógica señalada en el acápite anterior. En efecto, así como pueden efectuarse violaciones a los derechos humanos a través de las personas jurídicas, del mismo modo, éstos pueden ser reparados. En tal sentido, encontrándose una causa todavía en proceso, no se habría permitido al Estado la oportunidad de reparar, por sus propios medios, cualquier situación jurídica supuestamente infringida<sup>12</sup>.

17. Sin embargo, en base al principio de buena fe<sup>13</sup>, Chirilagua renuncia a su derecho de plantear dicha excepción, en tanto se trata de una facultad que posee el Estado<sup>14</sup>, ya que de mantenerse ésta y declarársele fundada, se suprimiría la discusión sobre la cancelación de la concesión a Radical Radio y sus consecuencias; por lo que se procederá a analizar el fondo del caso y así evidenciar la voluntad del Estado para demostrar que no ha violado el derecho la libertad de expresión de las presuntas víctimas, ni ninguno de los otros derechos alegados. Bajo ninguna circunstancia esta decisión se entenderá como un

<sup>9</sup> CIDH. *Tomás E. Carvallo Quintana vs. Argentina*. Caso 11.859, Informe No. 67/01, 14 de junio de 2001, párr. 55-56; CIDH. *Bendeck-Cohdinsa vs. Honduras*. Informe No. 106/99, 27 de septiembre de 1999, párr. 16-20; CIDH. *Bernard Merens y familia vs. Argentina*. Informe No. 103/99, 27 de septiembre de 1999, párr. 15; CIDH. *Petición MEVOPAL S.A. vs. Argentina*. Informe No. 39/99, 11 de marzo de 1999, párr. 18 y 19; y CIDH. *Tabacalera Boquerón S.A. vs. Paraguay*. Informe No. 47/97, 16 de octubre de 1997, párr. 27.

<sup>10</sup> Corte IDH. *Caso Cantos*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001, párr. 25 y 29.

<sup>11</sup> Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párrs. 123, 125, 138 y 156; Comité de Derechos Humanos (en adelante, CDH). *Sharif Mohamed vs. Barbados*. Comunicación No. 502/1992, U.N. Doc. CCPR/C/50/D/502/1992, 4 de abril de 1994, párr. 6.2; CDH. *Michelle Lamagna vs. Australia*. Comunicación No. 737/1997, U.N. Doc. CCPR/C/65/D/737/1997, 30 de abril de 1999, párr. 6.2; Corte Internacional de Justicia. *Barcelona Traction, Light and Power Company*, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p.36, párr. 47; y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH). *Pine Valley Developments Ltd and Others vs. Ireland*, Judgment of 29 November 1991, párr. 42.

<sup>12</sup> FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. *Ob. Cit.*, p. 303.

<sup>13</sup> Véase el artículo 26 de la Convención de Viena y CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. *Curso de Derecho Internacional Público*. Madrid: Editorial Tecnos, 1992. p. 142.

<sup>14</sup> MEDINA QUIROGA, Cecilia y Claudio Nash Rojas. *Sistema interamericano de derechos humanos: introducción a sus mecanismos de protección*. Santiago de Chile: Universidad de Chile y Centro de Derechos Humanos. 2007, p. 63.

reconocimiento de responsabilidad internacional por alguna violación a los artículos 8 y 25, en relación con el 1.1 de la Convención, cuyo detalle será expuesto en un momento posterior.

### 5.3) Alegatos sobre el fondo

18. En este punto, el Estado contradirá todos los extremos del informe de la Comisión, así como los planteados en el escrito autónomo presentando por los representantes de las presuntas víctimas<sup>15</sup>.

#### 5.3.1) Chirilagua no violó el artículo 13 en relación al artículo 1.1 de la Convención

19. Chirilagua respetó y garantizó<sup>16</sup> el derecho de las presuntas víctimas a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones (dimensión individual), así como también el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información y a estar bien informada (dimensión colectiva)<sup>17</sup>, a través de los medios que se consideraron pertinentes, procurando la emisión y recepción de la información brindada -en especial por medio de Radical Radio y Radio Su-Versión- y su participación en el Facebookazo.

20. Dado el alto valor de la libertad de expresión en el marco jurídico interamericano<sup>18</sup>, no existió por parte del Estado una política de censura previa al ejercicio de la libertad

<sup>15</sup> De acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de la Corte.

<sup>16</sup> Corte IDH, *Caso Velásquez Rodríguez*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 162. Corte IDH, *Caso Godínez Cruz*. Fondo. Sentencia del 20 de enero de 1989, párr. 171. Corte IDH, *Caso Neira Alegría y otros*. Fondo. Sentencia del 19 de enero de 1995, párr. 85.

<sup>17</sup> Corte IDH. “*La Colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos)*”. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 30; Corte IDH, *Caso Kimel*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de mayo de 2008, párr. 53. Corte IDH. *Caso López Álvarez*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1 de febrero de 2006, párr. 163. Corte IDH. *Caso de Claude Reyes y otros*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de septiembre de 2006, párr. 75. Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de julio de 2004, párr. 108. Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*. Sentencia del 6 de febrero de 2001, párr. 146. Corte IDH. *Caso de Ricardo Canese*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2004, párr. 77. Corte IDH. *Caso “La Última Tentación de Cristo”* (Olmedo Bustos y otros v. Chile). Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de febrero de 2001, párr. 64.

<sup>18</sup> Véase los artículos 13 de la Convención, el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana y CIDH. Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión en *Informe Anual de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008*. OEA/Ser.L/V/II.134, doc. 5 rev.1, 25 de febrero de 2009, párr. 5. Asimismo, CIDH. *Informe sobre terrorismo y derechos humanos*, OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1 corr., 22 de octubre de 2002, párr. 266.

expresión, en respeto a la prohibición absoluta estipulada en el artículo 13.2 de la Convención. No obstante, es universalmente aceptado<sup>19</sup> que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y, como ha sido instaurado por esta Corte<sup>20</sup>, puede estar sujeto a restricciones, en particular cuando interfiere con otros derechos garantizados por la Convención.

21. El Estado impuso restricciones a la libertad de expresión a las presuntas víctimas en tanto sus conductas fueron generadoras de responsabilidad, conforme a los criterios establecidos por esta Corte<sup>21</sup>. A saber, la existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas por ley, la legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y que dichas causales sean “necesarias para asegurar” los mencionados fines<sup>22</sup>.
22. Chirilagua previó *ex ante*<sup>23</sup>, en su Código Penal, los delitos de hurto de bienes del Estado<sup>24</sup>, instigación a delinquir<sup>25</sup>, difamación<sup>26</sup> y homicidio<sup>27</sup>, imputados a las presuntas víctimas, los mismos que estaban redactados de manera expresa, taxativa, precisa y clara.

<sup>19</sup> Véase el artículo 13.2 de la Convención, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el artículo 10 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 y el artículo 9 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul) de 1981.

<sup>20</sup> Corte IDH, *La Colegiación Obligatoria de Periodistas* (arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 36; Corte IDH, *Caso Herrera Ulloa*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 120; Corte IDH, *Caso Perozo y otros*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de enero de 2009, párr. 117; Corte IDH, *Caso Usón Ramírez*. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre de 2009, párr. 48; Corte IDH, *Caso Kimel*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de mayo de 2008, párr. 54-56; Corte IDH, *Caso Ricardo Canese*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C No. 111, párr. 95; Corte IDH, *Caso Palamara Iribarne*. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C No. 135, párr. 79; y Corte IDH, *Caso Apitz Barbera y otros*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de agosto de 2008, párr. 131.

<sup>21</sup> Corte IDH, *Caso Tristán Donoso*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 116-130. CIDH. Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión en *Informe Anual de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2004*, párr. 3.

<sup>22</sup> Corte IDH. “*La Colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos)*”. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 39

<sup>23</sup> Corte IDH. “*La Colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos)*”. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 39.

<sup>24</sup> Véase las Respuestas a las preguntas del Caso, p. 13.

<sup>25</sup> Véase el Caso Hipotético, párr. 32.

<sup>26</sup> Ídem.

<sup>27</sup> Véase las Respuestas a las preguntas del Caso, p. 13.

23. Asimismo, tales restricciones fueron necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección del orden público<sup>28</sup>. En los procesos penales por los delitos de homicidio y difamación, el Estado ponderó el ejercicio del derecho a la libertad de expresión junto con los derechos a la vida, a la integridad personal y a la honra y dignidad afectados<sup>29</sup>. En los procesos penales por los delitos de instigación a delinquir y hurto de bienes del Estado, Chirilagua procuró el restablecimiento del orden público, obedeciendo a causas reales y objetivamente verificables.
24. Chirilagua impuso restricciones necesarias en una sociedad democrática<sup>30</sup>, al ser éstas idóneas, necesarias y proporcionales. Fueron idóneas por cuanto las restricciones impuestas fueron medidas efectivamente conducentes para obtener los fines imperiosos establecidos en el artículo 13.2 de la Convención. Igualmente, fueron necesarias porque dichos fines no podían alcanzarse sino a través de la vía penal.
25. Por ello, con especial cautela<sup>31</sup> y dadas las particularidades del caso<sup>32</sup>, se encontró necesario el uso de la vía penal<sup>33</sup> en forma verdaderamente excepcional, en tanto se trató de un caso (i) de extrema gravedad, (ii) en el que se comprobó el dolo en la actuación de los encontrados responsables, (iii) el mismo que supuso un daño muy grave a los bienes jurídicos tutelados y (iv) en el que el medio usado fue de tipo masivo. La vía penal era la

---

<sup>28</sup> Véase el artículo 13.2 literales a) y b) de la Convención. Ambos criterios también considerados en CDH. *Observación General No. 10*, Artículo 19 - Libertad de opinión, 19º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (1983), párr. 4.

<sup>29</sup> Véase los artículos 4, 5 y 11 de la Convención.

<sup>30</sup> Véase los artículos 29 y 32 de la Convención. Asimismo, Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de julio de 2004, párr. 120-123. CIDH. Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión en *Informe Anual de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008*. OEA/Ser./L/V/II.134, doc. 5 rev.1, 25 de febrero de 2009, párr. 77.

<sup>31</sup> Corte IDH, *Caso Ricardo Canese*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2004, párr. 104; Corte IDH, *Caso Kimel*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de mayo de 2008, párr. 76; y Corte IDH. *Caso Palamara Iribarne*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de noviembre de 2005, párr. 79.

<sup>32</sup> Corte IDH, *Caso Usón Ramírez*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre de 2009, párr. 74.

<sup>33</sup> Idem.

única idónea por la especial función de la pena que actúa “no especialmente sobre el condenado, sino generalmente sobre la comunidad”<sup>34</sup>.

26. Finalmente, respecto de la proporcionalidad, Chirilagua verificó que el sacrificio de la libertad de expresión no fue desmedido frente a las ventajas de las restricciones<sup>35</sup>, por cuanto estas (i) implicaron la imposición de las penas mínimas y (ii) al término de los procesos penales (en los casos de menor lesividad), se permitió la conmutación de las mismas. De ello se dará cuenta en el breve análisis de los procesos penales seguidos a las presuntas víctimas.

***a. Respetto del proceso penal seguido por el delito de hurto de bienes del Estado***

27. Conforme a nuestro Código Penal<sup>36</sup>, se configuró el delito de hurto de bienes del Estado al comprobarse el apoderamiento de un bien público, el espectro electromagnético, por personas no habilitadas para ello en un espacio geográfico determinado y para su uso y provecho propio. Ciertamente, la localidad de San Pedro de los Aguados, en la que se concentraron los sucesos de violencia, fue informada exclusivamente a través de Radical Radio y Radio Su-Versión<sup>37</sup>.

28. Esta última, bajo la dirección del señor Hoffman, inició transmisiones radiales desde agosto de 1996, sin contar con el título habilitante para ello (concesión). Asimismo, dicha

<sup>34</sup> ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del delito. Madrid: Civitas, 1997, pp. 89-90.

<sup>35</sup> Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001, párr. 69. En el mismo sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia del TEDH. *Schorschach and News Verlagsgesellschaft v. Austria*, no. 39394/98, Judgment, 13 november 2003, § 29; TEDH. *Perna v. Italy*, no.48898/98, Judgment, 6 may 2003, § 39; TEDH. *Dichand and others v. Austria*, no. 29271/95, Judgment, 26 February 2002, § 37; TEDH. *Case of Lehideux and Isorni v. France*, no. 24662/94, Judgment, 23 September, 1998, § 55; TEDH. *Case of Otto-Preminger-Institut v. Austria*, no. 13470/87, Judgment, 20 September, 1994, §49; TEDH. *Case of Castells v. Spain*, Judgment, 23 April, 1992, §42; TEDH. *Case of Oberschlick v. Austria*, Judgment, 25 April, 1991, §57; TEDH *Case of Müller and Others v. Switzerland*, Judgment, 24 May, 1988, §33; TEDH., *Case of Lingens v. Austria*, Judgment of 8 July, 1986, §41; TEDH., *Case of Barthold v. Germany*, Judgment of 25 March, 1985, §58; TEDH., *Case of The Sunday Times v. United Kingdom*, Judgment of 29 March, 1979, §65; y TEDH., *Case of Handyside v. United Kingdom*, Judgment of 7 December, 1976, §49.

<sup>36</sup> Véase las Respuestas a las preguntas del Caso, p. 13.

<sup>37</sup> *Ibid.*, párr. 25, 26 y 27.



radioemisora, en uso *de facto* del espectro electromagnético, permitió que a través de sus equipos Radical Radio llegara a San Pedro de los Aguados, donde no se había adjudicado ni prorrogado licencia alguna para operar<sup>38</sup>. Así, Radical Radio usó una porción determinada del espectro electromagnético para la que no estaba habilitada, en provecho propio. Dichos actos perjudicaron no solo al Estado, sino también a la colectividad, ya que usaron un bien público escaso (el espectro electromagnético), afectando a los medios de comunicación que, conforme a derecho, materializan el derecho a la libertad de expresión.

29. Teniendo en cuenta ello, las penas impuestas fueron las mínimas (2 años de prisión), con posibilidad de ser conmutadas por una multa igualmente proporcional.

***b. Respetto del proceso penal seguido por el delito de instigación a delinquir***

30. El discurso promovido por medio de Radical Radio y Radio Su-Versión<sup>39</sup> constituyó un discurso de odio en contra del Presidente y de la clase social que él representaba, azuzando por medios masivos a la población en torno a la instauración de la Papeleta y la tenencia de tierras en un país en el que el 60% de la población se concentra en zonas rurales<sup>40</sup>. Dicho discurso fue contrario a la prohibición expresa del artículo 13.5 de la Convención, y, en consecuencia, se configuró el delito de instigación a delinquir al incitar públicamente a los ciudadanos a la defensa de sus derechos por todos los medios -esto es, también los ilegales-, cuando tales derechos no eran amenazados.

31. La discusión de temas de alto interés público, como puede ser a través de la marcha – sobre la continuación o no de un gobernante al mando- o de los espacios radiales, era una apuesta por el diálogo y el debate abierto, jamás significó el uso de la violencia -antítesis misma de la democracia<sup>41</sup>- que se promovió a través de Radical Radio y Radio Su-Versión

<sup>38</sup> Véase el Caso Hipotético, párr. 21.

<sup>39</sup> Véase el Caso Hipotético, párr. 25 y 27.

<sup>40</sup> Véase las Respuestas a las preguntas del Caso, p. 2.

<sup>41</sup> FAUNDEZ, Héctor. *Los límites de la libertad de expresión*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, p. 280.

y, en especial, por el Sr. Garra. Esta Corte debe tener presente que la radio es el medio más involucrado con la vida cotidiana de la comunidad<sup>42</sup>. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda en el “Media Case” constató que, “contrario a la prensa escrita, la radio es inmediatamente presente y activa. El poder de la voz humana (...) agrega una calidad y dimensión al mensaje que va más allá del lenguaje”<sup>43</sup>. En situaciones de conmoción social “la radio aumenta la sensación de miedo, peligro y urgencia originando la necesidad de acción por los oyentes”<sup>44</sup>.

32. Por tal motivo, la responsabilidad del señor Garra, como profesional de la comunicación social<sup>45</sup>, era altamente especial ya que debía regirse por conductas éticas<sup>46</sup>, especialmente por el contexto electoral<sup>47</sup> y de conmoción social que atravesaba el país. Más aún, si dicho periodista tenía el control de la situación narrada y la capacidad para convocar a la población de San Pedro de los Aguados.
33. En tal sentido, luego del análisis de participación de cada uno de los imputados, se impuso las penas mínimas (6 meses de prisión) a los señores Pereira y Hoffman, en tanto proporcionaron los medios al señor Garra. Por su parte, el señor Garra fue encontrado responsable del delito bajo análisis y la pena total impuesta (12 años) está relacionada con la comisión de otros dos delitos más, en especial con el delito de homicidio, descrito

---

<sup>42</sup> ZEPEDA, José y FERNANDEZ, Benjamin. *La radio. Entre la comunicación y el poder*. Holanda: Radio Nederland Wereldomroep, 2009, p. 139.

<sup>43</sup> TPIR. The Prosecutor vs. Ferdinand Nahimana, Jean – Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze. Case No. ICTR-99-52-T, 3 december 2003, parr. 99. Traducción libre del siguiente texto: “*Unlike print media, radio is immediately present and active. The power of the human voice, (...), adds a quality and dimension beyond language to the message conveyed. Radio heightened the sense of fear, the sense of danger and the sense of urgency giving rise to the need for action by listeners*”.

<sup>44</sup> Ídem. Traducción libre del siguiente texto: “*Radio heightened the sense of fear, the sense of danger and the sense of urgency giving rise to the need for action by listeners*”.

<sup>45</sup> Corte IDH. *Caso Kimel*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de mayo de 2008, párr. 57.

<sup>46</sup> CIDH. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, Principio 6, aprobada por la Comisión durante su 108° período de sesiones en octubre del año 2000.

<sup>47</sup> Corte IDH “La Colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos)”. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5. párr. 213 y TEDH. *Caso Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Bélgica*, Judgment, 2 march 1987, §47.

posteriormente. Así, se comprueba la estricta proporcionalidad de las penas impuestas<sup>48</sup>. a los señores Pereira, Hoffman y Garra, en tanto afectaron un bien supraindividual como lo es el orden público; por lo que tampoco existe violación al artículo 13 de la Convención en este extremo.

***c. Respetto del proceso penal seguido por el delito de difamación***

34. El delito de difamación contra funcionarios públicos se configuró en el extremo de haber expuesto a una persona al desprecio o al odio público, agravándose por su comisión a través de medios de publicidad. Así, por medio de la afectación al derecho al honor y a la reputación que le correspondía al Presidente Escalante como persona, se contravino los intereses del Estado, por lo que la acción correspondió de manera debida al Ministerio Público.
35. La difamación constatada suponía que la clase social a la que pertenecía y representaba el Presidente Escalante, por la posesión de tierras, estaba relacionada con actos de corrupción; lo que significaba que no solo el hecho de tener tierras era reprochable en la sociedad de Chirilagua, sino que el origen de la riqueza acumulada provenía de la comisión de ilícitos, acrecentando los conflictos sociales en el país. Además, pudo ocasionar la desconfianza en la actuación del Presidente Escalante también a nivel internacional, al ser este el máximo representante de Chirilagua. Más aún si se tiene en cuenta la participación de capitales extranjeros en el país, en tanto una de las principales actividades económicas es la exportación de cobre. Es decir, tales afirmaciones fueron contrarias en una sociedad democrática, donde no se puede generar situaciones que desestabilicen al propio Estado.
36. Entre las distintas declaraciones emitidas, destacó la calificación de “corrupto” al Presidente, lo que comprobó, una vez más, la ligereza y la falta de responsabilidad que

---

<sup>48</sup> TEDH. *Cumpana and Mazare v. Romania* [GC], no. 33348/96, 17 december 2004, § 115.

tuvo el periodista Garra al emitirlas en un contexto de especial polarización social y sin prueba ni investigación alguna<sup>49</sup>. Se trata de un calificativo que implica la realización de actos de corrupción, los mismos que conforme al artículo VII de la “Convención Interamericana contra la Corrupción”<sup>50</sup> deben ser tipificados como delitos en los derechos internos de los Estados Americanos.

37. El señor Garra actuó con real malicia<sup>51</sup>, pues tenía conocimiento de que se estaban difundiendo informaciones lejanas a la verdad de los hechos y actuó así con la intención de causar daño; contrario a lo que esta Corte ha señalado respecto del derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos<sup>52</sup>. El Poder Judicial de Chirilagua constató la intención de denigrar y hacer ilusorio el derecho a la honra y a la dignidad que le corresponde al Presidente Escalante como persona<sup>53</sup> pues la caricaturización realizada implicó la ridiculización perversa del mismo (véase párrafo 4 *supra*), siendo ello de conocimiento público, aun cuando ésta fuera por medio del persona “Fatilio Estafante”.

38. En tal sentido, las penas mínimas impuestas a los señores Pereira y Hoffman (6 meses de prisión) fueron tales debido a que éstos coadyuvieron al señor Garra a la perpetración del delito, por lo que el Poder Judicial distinguió el grado de participación de cada uno.

#### ***d. Respetto del proceso penal por el delito de homicidio***

39. Conforme a lo estipulado en nuestro Código Penal, el delito de homicidio se configuró al haber causado el señor Garra la muerte de tres personas, dos de ellas civiles y un elemento

<sup>49</sup> Corte IDH. Caso *Herrera Ulloa*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de julio de 2004, párr. 132-133.

<sup>50</sup> Véase artículo VII de la Convención Interamericana contra la Corrupción del 29 de marzo de 1996.

<sup>51</sup> TEDH. *Castells v. Spain*, no. 11798/85, Judgment, 23 April 1992, § 46.

<sup>52</sup> Corte IDH. Caso *Kimel*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de mayo de 2008, párr. 79.

<sup>53</sup> BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Segunda edición. Barcelona: Ariel, 1991, pp. 142-143. CALDERÓN CERREZO, Angel. y CHOCLÁN MONTALVO, Jose Antonio. Manual de Derecho Penal II. Parte Especial. Madrid: Ediciones Deusto, 2005, p. 154.

policial<sup>54</sup>, ocurridas el 3 de marzo de 2008. Los hechos de violencia aún están siendo investigados, ya que, por las circunstancias mismas del enfrentamiento durante el Facebookazo, la identidad de quienes atentaron contra la vida de los manifestantes no se ha podido aclarar<sup>55</sup>.

40. No obstante, el que no se haya identificado al autor material del delito en cuestión, no implica que este no exista y que no pueda verificarse el que el señor Garra actuara como instigador, creando una voluntad concreta en quien materializará el delito.
41. Al respecto, cabe delimitar el espacio geográfico, las personas destinatarias del mensaje, el modo en que se materializó el mismo y las personas afectadas (víctimas). El lugar al que se circunscribe el mensaje es San Pedro de los Aguados. Ya se ha señalado que a dicha localidad solo llegó información por medio de Radical Radio y Radio Su-Versión y que los directores de ambas radioemisoras eran conscientes de ello. Las personas a las que se dirigía el mensaje eran los manifestantes que participaban de la marcha. La acción de defender los derechos “a toda costa” se materializó con “palos y piedras” que portaron los manifestantes pese a tratarse de una marcha pacífica –dato que el señor Garra tenía conocimiento durante su transmisión. Finalmente, las personas afectadas o a las que se dirigía la acción violenta eran los partidarios del gobierno de turno.
42. El mensaje del señor Garra fue de contenido idóneo (para producir el resultado), eficaz (para producir la voluntad criminal) y dirigida (a un grupo en particular). Téngase en cuenta que dicho mensaje fue enviado en el momento de mayor exacerbación de los marchantes. Dicho periodista sabía que tenía la capacidad de crear la voluntad de afectar un bien jurídico específico (la vida), por lo que la pena impuesta (12 años de prisión) se

---

<sup>54</sup> Véase el Caso Hipotético, párr. 33.

<sup>55</sup> Véase las Respuestas a las preguntas del Caso, pág. 1.

diferencia de las otras impuestas a las presuntas víctimas por la comisión del delito de homicidio.

43. Luego de verificar el cumplimiento de todos los criterios que esta Corte exige para que una restricción sea legítima, Chirilagua debe resaltar que eran “las autoridades nacionales las que estaban en mejor capacidad de evaluar, de manera inmediata y directa”<sup>56</sup> la protección de todos los valores en conflicto, contando para ello con un cierto margen de apreciación admitido en la evaluación de las restricciones a la libertad de expresión<sup>57</sup>.
44. Por todas las consideraciones expuestas, el Estado solicita a esta Honorable Corte concluya y declare que Chirilagua no violó el artículo 13 en relación con el artículo 1.1 de la Convención en perjuicio de las presuntas víctimas.

### **5.3.2) Chirilagua no violó los artículos 8 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención**

45. A continuación, se explicará cuál es el contenido protegido de ambos derechos y se demostrará que el Estado respetó y garantizó los mismos. Con tal finalidad, primero se evidenciará la existencia de recursos sencillos, rápidos, efectivos, ante tribunales competentes que tutelan a la ciudadanía ante violaciones de sus derechos, para luego demostrar la materialización de las garantías del debido proceso en todos los procesos seguidos en el Estado.
46. Previo al análisis de fondo, se debe señalar que, si bien existe actualmente una tendencia en la jurisprudencia<sup>58</sup> de la Corte a realizar un análisis separado de ambos derechos,

---

<sup>56</sup> FAUNDEZ, Héctor. *Los límites de la libertad de expresión*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, p. 417.

<sup>57</sup> Ídem.

<sup>58</sup> Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 23; Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 57; Corte IDH. Caso Bayarri. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 102; Voto Parcialmente Disidente. Medina Quiroga. Corte IDH. Caso 19 Comerciantes. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109; Voto

concibiendo un contenido distinto y disgregable de los mismos, Chirilagua, como Estado democrático que evidencia una prioritaria preocupación por el respeto y garantía de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, se adhiere a la postura tradicional<sup>59</sup> y mayoritaria de la jurisprudencia de esta Corte, la cual, al considerarlos interdependientes, realiza un tratamiento conjunto de ambos derechos. Bajo esta postura, el artículo 25 hace referencia al derecho de acceso a la justicia, mientras que el artículo 8 regula el debido proceso. Se adopta esta posición toda vez que se considera más protectora de los derechos de las personas y, por ende, promotora del Estado de Derecho y la Democracia, puesto que no se puede concebir que se presente un debido proceso sin la existencia de un recurso sencillo, rápido y efectivo que permita acceder al mismo. Del mismo modo, sin la materialización de las garantías de un debido proceso, no podrá afirmarse la existencia de un recurso sencillo, rápido y efectivo ante tribunales competentes que tutelen los derechos de los ciudadanos, que es justamente consecuencia del debido proceso.

#### **a. Existen recursos sencillos, rápidos y efectivos**

47. El artículo 25 “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática [...]”<sup>60</sup>, pues exige la existencia de recursos adecuados y efectivos que permitan alcanzar la tutela de los

---

Concurrente. Medina Quiroga. Corte IDH. *Caso Gómez Palomino*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136 y MEDINA QUIROGA, Cecilia. *La Convención Americana: teoría y jurisprudencia*. Santiago de Chile: Centro de Derechos Humanos. 2005, p. 360.

<sup>59</sup> -Corte IDH. Voto razonado. Cançado Trindade. Corte IDH. *Caso López Álvarez*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141Corte IDH; *Usón Ramírez*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre de 2009, párr. 128; Corte IDH. *Caso Kwas Fernández*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009, párr. 110 y Corte IDH. *Caso Castañeda Gutman*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008, párr. 34.

<sup>60</sup> Corte IDH. *Caso Castillo Páez*. Fondo. Sentencia del 3 de noviembre de 1997, párr. 82.

derechos fundamentales, tal y como ha sido señalado por la jurisprudencia interamericana<sup>61</sup>.

48. De esta forma, el Estado materializó el derecho de las presuntas víctimas de recurrir ante el Poder Judicial, garantizando la estructura necesaria para la protección de sus derechos. Con tal finalidad, Chirilagua previó por ley y con anterioridad, la instauración de procesos regulares y extraordinarios, lo cual se corrobora con la existencia de los procesos contenciosos administrativos, penales y constitucionales<sup>62</sup>, a los que se pudo acudir sin limitación alguna.

49. Asimismo, esta Corte<sup>63</sup> ha señalado que un recurso será adecuado si se constituye como un medio eficaz y suficiente para alcanzar el resultado ansiado por el solicitante y será efectivo en tanto sea capaz de producir el resultado para el que fue concebido. Las presuntas víctimas interpusieron tres procesos, a saber, las acciones constitucionales iniciadas y el proceso contencioso administrativo, en representación de sus respectivas radios (*supra* párrafos 14 y 17), y los recursos de apelaciones interpuestos en los procesos penales llevados a cabo.

50. Respecto de los recursos *constitucionales y contencioso administrativo*, estos se constituyeron como medios eficaces para satisfacer las controversias planteadas en cada uno de ellos. Así, los señores Pereira y Byron iniciaron los procesos contencioso administrativo – aún pendiente de resolución – y constitucional. Dichos procesos estaban regulados por ley. Ahora bien, debido a que los procesos contenciosos por la complejidad de la materia tienen una duración extensa, la jurisprudencia chirilagüense ha previsto que en los casos de presunta vulneración de derechos fundamentales, en el marco de procesos

---

<sup>61</sup> Corte IDH. “*El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*”. Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, párr. 32. Corte IDH. *Caso Durand y Ugarte*. Fondo. Sentencia del 16 de agosto de 2000, párr. 101.

<sup>62</sup> Véase las Respuestas a las Preguntas del Caso, p. 3.

<sup>63</sup> Corte IDH. *Caso Godínez Cruz*. Fondo. Sentencia del 20 de enero de 1989, párr. 67. Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez*. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988, párr.66.



contenciosos, se habilite la vía constitucional para la protección de los mismos, tal como ocurrió en el presente caso<sup>64</sup>. Con ello el Estado cumplió con su deber no sólo de tener recursos, sino de garantizar que estos sean efectivos para la protección de los derechos recogidos en la Convención<sup>65</sup> y los provenientes del derecho interno. Asimismo, existen precedentes jurisprudenciales en el Estado en los que se acogieron demandas similares, en los cuales el contexto también era de gran impacto social, es decir, no había indicio alguno que sustentara que los mismos no serían efectivos<sup>66</sup>.

51. Por otro lado, el señor Hoffman interpuso un recurso constitucional como representante de Radio Su-Versión, el cual fue declarado admisible por la judicatura interna, la cual analizó el fondo de la controversia en base al principio *iuria novit curia*<sup>67</sup>; esto porque Radio Su-Versión no tenía legitimidad, pues quien era propietaria<sup>68</sup> de los bienes de la radio y quien había decidido el inicio de transmisiones<sup>69</sup> de manera ilegal era ACOSINTI. Pese a que dicha demanda debió ser declarada inadmisibile o en su defecto improcedente, ya que el peticionante no tenía legitimidad para obrar, los jueces subsanaron el error y analizaron el fondo. Con ello el Estado cumplió no sólo con instaurar los procesos idóneos, sino que además procuró la eficacia de los mismos, evitando que aspectos de mero procedimiento afectaran la tutela de derechos de las personas. Finalmente, el artículo 25 señala que estos recursos deben ser rápidos, lo cual debe analizarse en concordancia

<sup>64</sup> Véase el Caso Hipotético, párr. 35.

<sup>65</sup> Corte IDH. “*El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*”. Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, párr. 32. Corte IDH. *Caso Durand y Ugarte*. Fondo. Sentencia del 16 de agosto de 2000, párr. 101.

<sup>66</sup> CIDH. Víctor Sánchez vs. Estados Unidos, 27 de octubre de 2005, párr 67; CIDH. Gray Graham vs. Estados Unidos. Informe No. 51/100, Caso 11.193, Informe Anual 2000, párr. 60; CIDH. Ramón Martínez Villareal vs. Estados Unidos. Informe Anual 2002, Caso 12.379, párr 70 , y CIDH. Mario Alfredo Lares-Reyes et al. vs. Estados Unidos, Caso 12.379, Informe Anual 2002; párr. 61.

<sup>67</sup> Corte IDH. *Caso Godínez Cruz*. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989, párr. 172. Corte IDH. *Caso Durand y Ugarte*. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000, párr. 76. Corte IDH. *Caso Castillo Petruzzi*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999, párr. 166.

<sup>68</sup> Véase las Respuestas a las preguntas del Caso, p. 10.

<sup>69</sup> Véase el Caso Hipotético, párr. 23.

con la materia y tipo de proceso iniciado, como se analizará en la aplicación del debido proceso.

52. Respecto de las apelaciones interpuestas en los *procesos penales*, estas se constituyeron como el medio eficaz y suficiente para revisar las sentencias emitidas en contra de los señores Hoffman, Pereira y Garra, respecto de los delitos imputados a cada uno de ellos. Potencialmente, podían producir el resultado anhelado por las presuntas víctimas: ser declarados inocentes. El hecho de que no se obtenga una sentencia favorable no implica que el recurso no sea efectivo, más aún si consideramos que el señor Dyle fue sobreseído y absuelto en los dos procesos penales seguidos en su contra.

53. Debe tenerse presente que las presuntas víctimas no interpusieron ningún recurso constitucional por el que cuestionaran el desarrollo de los procesos penales, pese a que como ya ha sido demostrado, existían procesos constitucionales que se constituían como los recursos eficaces, rápidos e idóneos en caso de vulneraciones a derechos fundamentales. Esto último demuestra que se respetó y garantizó la protección judicial, así como el debido proceso.

#### **b. Los procesos se siguieron ante tribunales competentes**

54. El Estado ha dado pleno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25.2. En primer lugar, garantizó que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidiera sobre los derechos de los ciudadanos que interpusieron recursos. Así, tribunales encargados de cada uno de los procesos seguidos a las presuntas víctimas fueron los competentes según las leyes del Estado, que prevén especialidades según la materia, estableciendo jueces administrativos, penales y constitucionales y los respectivos tribunales de apelación.

55. En segundo lugar, en el Estado se desarrollaron a plenitud las posibilidades de los recursos judiciales activados por las presuntas víctimas. Así, debido a la especialización

en la materia y conocimiento de los tribunales del Estado, en ningún caso las demandas presentadas fueron declaradas improcedentes liminarmente (véase *supra* párrafo 7). Las presuntas víctimas obtuvieron, en todos los casos, sentencias sobre el fondo, producto de un análisis de los hechos y derechos involucrados en cada caso concreto, con lo que se desarrollaron a plenitud los recursos judiciales, tal como lo dispone el artículo 25.b. Muestra de ello es lo ocurrido en el caso del señor Hoffman (véase párrafo 60 *supra*).

56. En tercer lugar, el Estado en cumplimiento del artículo 25. 2. c, tiene previstas por ley acciones de cumplimiento de sentencias judiciales<sup>70</sup>. Además, el Estado ha previsto que existan juzgados en las diferentes localidades, como son el Segundo Tribunal del Circuito de Cedralópolis y el Tribunal de Apelaciones de Gorgia, con lo cual se promueve el acceso a la justicia en Chirilagua y la efectiva administración de justicia para todos sus ciudadanos.

57. En conclusión, el Estado cumplió con el artículo 25 y el artículo 1.1, tal como lo señala la jurisprudencia<sup>71</sup>, puesto que (i) diseñó y consagró normativamente diversos recursos efectivos a los que pudieron acudir las presuntas víctimas, sin limitación alguna, y (ii) aseguró la debida aplicación de los mismos por parte de sus autoridades judiciales, siendo que en todos los casos se resolvió sobre el fondo, analizando los hechos e imputando

<sup>70</sup> Véase el Caso Hipotético, párr. 22.

<sup>71</sup> Corte IDH. *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros)*. Fondo. Sentencia del 19 de noviembre de 1999, párr. 237. Corte IDH. *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2001, párr. 135. Corte IDH. *Caso Comunidad Indígena Yakye Axa*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 17 de junio del 2005, párr. 99. Corte IDH. *Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros)*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de noviembre de 2006, párr. 130. Corte IDH. *Caso del Penal Miguel Castro Castro*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2006, párr. 381. Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 11 de mayo del 2007, párr. 145. Corte IDH. *Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 10 de julio de 2007, párr. 124. Corte IDH. *Caso Castillo Petrucci y otros*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999, párr. 184. Corte IDH. *Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros)*. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998, párr. 164. Corte IDH. *Caso Blake*. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998, párr. 102. Corte IDH. *Caso Suárez Rosero*. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 65. Corte IDH. *Caso Castillo Páez*. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997, párr. 83.

responsabilidades, diferenciando la participación de cada una de las personas, sin ninguna intención encubierta de limitar el derecho a la libertad de expresión

**c. El Estado materializó las garantías del debido proceso**

58. Esta Corte ha dispuesto que el derecho al debido proceso<sup>72</sup> implica el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales<sup>73</sup>.

59. Respecto de los procesos penales, estos se materializaron a iniciativa del Ministerio Público que formalizó acusación y el Poder Judicial de Chirilagua los condujo debidamente (véase párrafos 31 a 52 *supra*) ante órganos jurisdiccionales competentes<sup>74</sup>, procurando a las presuntas víctimas su derecho a ser oídas, esto es, el derecho por el que toda persona puede tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones<sup>75</sup>.

60. Dado el respeto por la separación de poderes y funciones en Chirilagua, la investigación penal en todos los casos fue llevada a cabo por el Ministerio Público, mientras que las decisiones de fondo fueron tomadas por un juez penal. Ello es muestra de la imparcialidad de los jueces al no ser estos quienes investigan ni quienes reúnen las pruebas de cargo, sino que se limitan a juzgar.

61. El Estado también respetó fielmente el *plazo razonable*. Los procesos penales por los delitos de difamación e instigación a delinquir imputados a los señores Hoffman, Pereira y Byron duraron aproximadamente tres meses; cuatro meses duró el proceso por delito de

---

<sup>72</sup> Artículo 8 de la Convención.

<sup>73</sup> Corte IDH. *Caso Baena Ricardo y otros*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de febrero de 2001, párr. 124, Corte IDH. *Caso del Tribunal Constitucional*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69. Corte IDH. *Caso Genie Lacayo*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de enero de 1997, párr. 74. Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 6 de febrero de 2001, párr. 102. Corte IDH. *Claude Reyes y otros*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de septiembre del 2006, párr. 116. Corte IDH. “*Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*”. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párr. 27.

<sup>74</sup> Véase las Respuestas a las preguntas del Caso, p. 3.

<sup>75</sup> Corte IDH. *Caso Apitz Barbera y otros*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de agosto de 2008, párr. 72.

hurto de bienes del Estado contra los tres mencionados; y cinco meses, el proceso por los delitos de homicidio, instigación a delinquir y difamación imputados al señor Garra. El Estado ha seguido los criterios adoptados por esta Corte<sup>76</sup> -inicialmente propuestos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos<sup>77</sup>- para definir cuándo se cumple el plazo razonable: (i) la actuación de las partes, (ii) la actuación del juez<sup>78</sup>, no existiendo hechos que evidencien alguna actuación dilatoria por ninguna de las partes, y (iii) la complejidad de la materia. Este último requisito debe ser analizado según la controversia planteada respecto de cada delito imputado. Así, cada proceso tuvo una duración distinta que se basó en la complejidad del caso, determinada por la cantidad de delitos imputados, el número de procesados y las pruebas presentadas. Cabe acotar que los plazos de resolución son los que usualmente transcurren en la jurisdicción interna.

62. Respecto de los procesos constitucionales, tampoco existen hechos que demuestren una dilación indebida ni por (i) actuaciones de las partes ni por (ii) actuaciones de los jueces. Respecto de (iii) la complejidad de la materia, debe tenerse presente que nos encontramos frente a vías de urgencia y, por ello, los plazos fueron sustancialmente menores a los procesos ordinarios. El proceso iniciado por Radical Radio duró 32 días y el iniciado por Radio Su-Versión, 40 días.

63. Respecto del proceso contencioso administrativo, (i) la actuación de las partes y (ii) la actuación del juzgador han sido diligentes en todo momento, no habiendo hechos que

---

<sup>76</sup> Corte IDH. *Caso Ximenes Lopes*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 4 de julio de 2006, párr. 196, Corte IDH. *Caso Baldeón García*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 6 de abril de 2006, párr. 151. Corte IDH. *Caso López Álvarez*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1 de febrero de 2006, párr. 132. Corte IDH. *Caso Ricardo Canese*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2004, párr. 141. Corte IDH. *Caso de las Hermanas Serrano Cruz*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1 de marzo de 2005, párr. 67, Corte IDH. *Caso Zambrano Vélez y otros*. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 4 de julio de 2007, párr. 102. Corte IDH. *Caso Salvador Chiriboga*. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia del 6 de mayo de 2008, párr. 78. Corte IDH. *Caso Heliodoro Portugal*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 12 de agosto de 2008, párr. 149. Corte IDH. *Caso Masacre de Pueblo Bello*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de enero de 2006, párr. 171.

<sup>77</sup> TEDH. *D.M. v. Poland*, 14 de enero de 2004, párr. 38. TEDH. *Humen v. Poland*, 15 de octubre de 1999, párr. 60.

<sup>78</sup> Corte IDH. *Caso Bulacio*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 18 de septiembre de 2003, párr. 115.

demuestren dilación indebida. Respecto de la (iii) complejidad de la materia, debemos señalar que los procesos contenciosos que implican la nulidad de una decisión administrativa son especialmente enrevesados, puesto que los intereses involucrados son de especial trascendencia: por un lado, intereses individuales y, por otro, intereses colectivos, representados por el Estado. Debido a ello, la duración de los mismos responde a procurar un análisis exhaustivo.

64. Finalmente, en todos los procesos – penales, constitucionales y contencioso – se siguieron las etapas regulares de admisión de la demanda (o denuncia), fijación en lista, término de contestación (o posibilidad de ejercer en el plazo razonable los correspondientes mecanismos de defensa), ofrecimiento y práctica de pruebas, conciliación judicial (de ser el caso), traslado a las partes para alegatos finales y sentencia<sup>79</sup>, dentro del marco del plazo razonable.
65. Igualmente, el Estado ha procurado a las supuestas víctimas la garantía judicial de recurrir el fallo ante un tribunal superior en todos los procesos llevados a cabo por ellas<sup>80</sup>. Tal como lo ha señalado esta Corte<sup>81</sup>, este derecho implica no sólo la existencia de un órgano superior jerárquico establecido con anterioridad, sino también que sea eficaz en corregir las decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho y que el Estado no restrinja o limite la interposición de este recurso dejándolo sin contenido. En todos los procesos, los tribunales de apelaciones respectivos procuraron a las presuntas víctimas sus derechos a ser oídas y a la defensa en un plazo razonable, por lo que se ratifica que tuvieron acceso a un recurso efectivo y en el marco de un debido proceso.

---

<sup>79</sup> Véase las Respuestas a las preguntas del Caso, p. 14.

<sup>80</sup> Véase Caso Hipotético, párr. 35 – 39.

<sup>81</sup> Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de julio de 2004, párr.. 159 – 151.

66. Asimismo, el Estado garantizó en todo momento a las presuntas víctimas el pleno ejercicio de su derecho a la defensa. En los procesos instaurados, los ciudadanos pudieron contar con abogados de su libre elección, los cuales pudieron plantear los recursos, impugnaciones y mecanismos de defensa convenientes en defensa de las presuntas víctimas. Muestra de ello es la actuación de los abogados del señor Garra, quienes interpusieron el recurso de apelación respectivo, frente a la condena por los delitos cometidos<sup>82</sup>.

67. Como ha quedado demostrado, Chirilagua respetó y garantizó a las presuntas víctimas el efectivo ejercicio del derecho a las garantías judiciales, en el marco de recursos sencillos, rápidos y efectivos ante tribunales competentes que tutelaron sus derechos fundamentales, por lo que solicitamos a esta Honorable Corte concluya y declare que Chirilagua no violó los artículos 8 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención en perjuicio de las presuntas víctimas

### **5.3.3) Chirilagua no violó el artículo 7 en relación con el artículo 1.1 de la Convención**

68. Concordando con lo señalado anteriormente (véase párrafo 20 *supra*), el Estado se pronunciará por la supuesta vulneración al presente artículo. La Corte ha señalado que el artículo 7 contiene dos tipos de regulaciones, una general y otra específica. La primera consagra el derecho a la libertad de toda persona y, la segunda, las garantías ante detenciones arbitrarias<sup>83</sup>. Ello supone que el derecho a la libertad no es ilimitado<sup>84</sup>. La privación del derecho a la libertad del señor Hoffman y el señor Garra fue como consecuencia de los procesos penales seguidos en su contra, en los cuales se garantizó el

<sup>82</sup> Véase Caso Hipotético, párr. 39.

<sup>83</sup> Corte IDH. *Caso Usón Ramírez*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre de 2009, párr. 143; Corte IDH. *Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 51; y Corte IDH. *Caso Yvon Neptune*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 89.

<sup>84</sup> Corte IDH. *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 92; y Corte IDH. *Caso Juan Humberto Sánchez*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 82.

debido proceso<sup>85</sup>, así como el acceder a recursos rápidos, sencillos y efectivos (supra apartado 3.1.1) lo que demuestra que no existió una privación arbitraria o ilegítima del derecho a la libertad<sup>86</sup>.

69. Ahora bien, respecto de las razones de la privación de la libertad, como medida proporcional a los actos cometidos, se ha constatado no sólo el cumplimiento de la previsión legal<sup>87</sup>, sino también la validez de los tipos penales bajo los cuales fueron procesados y condenados. En todos los casos no sólo se cumplió con las previsiones legales sino que las mismas se basaron en criterios de Justicia material<sup>88</sup> necesarios en un Estado de Derecho.

70. Ninguna de las presuntas víctimas fue sometida a prisión preventiva, la cual es una severa restricción al derecho a la libertad personal, aún cuando se cumplan los criterios establecidos por esta Corte, pues se es privado de la libertad sin existir sentencia firme que señale la culpabilidad<sup>89</sup>. Dicha grave –aunque válida- restricción no ocurrió en este caso.

71. Por todo lo anterior, queda demostrado que la privación de la libertad de los señores Garra y Hoffman se debió a la comisión de actos ilícitos<sup>90</sup> previstos por ley, luego de haber sido encontrados responsables en los procesos penales respectivos seguidos ante jueces

---

<sup>85</sup> Corte IDH. *Caso Myrna Mack Chang*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr. 209; Corte IDH. *Caso Bulacio*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párr. 114; Corte IDH. *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002, párr. 142 a 145; Corte IDH. *Caso García Asto y Ramírez Rojas*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparación y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2005, párr. 166; Corte IDH. *Caso Gómez Palomino*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de noviembre de 2005, párr. 85. Corte IDH; y *Caso de la Comunidad Moiwana*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparación y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005, párr. 160.

<sup>86</sup> Corte IDH. *Usón Ramirez*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre de 2009, párr. 148.

<sup>87</sup> Corte IDH. *Caso Gangaram Panday*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 21 de enero de 1994, párr.47; Corte IDH. *Caso Suárez Rosero*. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 43; y Corte IDH. *Caso Bayarri*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008, párr. 54.

<sup>88</sup> CDH. *Danyal Shafiq v. Australia*. Comunicatilon No. 1324/2004, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1324/2004, 13 de noviembre de 2006, párr. 7.2.

<sup>89</sup> Corte IDH. *López Álvarez*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006, párr. 67.

<sup>90</sup> Corte IDH. *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 52.



competentes, en los cuales se respetaron y garantizaron los derechos de acceso a la justicia y las garantías del debido proceso<sup>91</sup>. Por lo tanto, solicitamos a esta Corte declare y concluya que no ha existido vulneración alguna al derecho a la libertad personal, en relación con el artículo 1.1 de la Convención

#### **5.3.4) Chirilagua no violó el artículo 21 en relación con el artículo 13 y 1.1 de la Convención**

72. El Estado rechaza la alegada violación del derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21 de la Convención. En concordancia con la actual jurisprudencia interamericana<sup>92</sup>, nos pronunciaremos respecto de la violación del derecho a la propiedad individual, en concordancia con el derecho a la libertad de expresión, puesto que dicha violación puede representar una medida indirecta que restrinja este último derecho.

73. En el presente caso, fueron confiscados los bienes que ACOSINTI, propietaria de Radio Su-versión, utilizaba para lograr el acceso ilegal al espectro electromagnético. La jurisprudencia interamericana<sup>93</sup> ha establecido un margen amplio sobre cuál es el ámbito de aplicación del derecho a la propiedad. Así, dicho derecho implica uso y disfrute, sin importar el tipo de bien: material o inmaterial.

74. COFERETEL, en cumplimiento estricto de sus funciones y actuando según lo establecía la ley<sup>94</sup>, procedió a la confiscación de los aludidos bienes. La razón por la cual el Estado actuó así responde a que ACOSINTI ya había demostrado en los hechos que iba a actuar ilegalmente, por lo que el cierre de sus locales de transmisión no era una medida

---

<sup>91</sup> Principio Número 2 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, A.G. res. 43/173, anexo, 43 U.N. GAOR Supp. (No. 49) p. 298, ONU Doc. A/43/49 (1988).

<sup>92</sup> Corte IDH. *Perozo y otros*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009, párr

<sup>93</sup> Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 120; Corte IDH. *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr 174; y Corte IDH. *Caso de la Comunidad Moiwana*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005, párr. 131.

<sup>94</sup> Véase las Respuestas a las Preguntas del Caso, p. 7.

suficiente, que evitara que se vuelva a utilizar el espectro electromagnético de manera ilegal. Por ello, la confiscación de los bienes fue la única medida que aseguraba que dicha situación ilegal no se repitiera.

75. Ahora bien, el artículo 21.2, así como la jurisprudencia interamericana<sup>95</sup> establece que el derecho a la propiedad no es absoluto, indicando que su privación amerita el pago de una indemnización justa. Una adecuada interpretación de dicha norma conlleva a su aplicación cuando la actuación de la persona respecto de sus bienes sea legal y la privación de dicho derecho por parte del Estado se produzca por razones de necesidad pública o interés social. Pero en aquellos casos en que sea la propia persona la que realice un uso ilegal de sus bienes, perjudicando al Estado y a terceros, la confiscación tendrá como objetivo que no se reitere dicha acción ilícita, siendo que la actuación del Estado en tales casos radica en reparar el daño inflingido y evitar que se continúen produciendo las afectaciones.

76. Por todo ello, se corrobora que la confiscación de los bienes estuvo sustentada en motivos ajenos a la interferencia con el derecho a la libertad de expresión. La confiscación se basó únicamente en criterios objetivos, respecto de la actuación ilegal de ACOSINTI en el uso del espectro electromagnético. Por lo tanto, solicitamos ante esta Corte que concluya en el sentido de que Chirilagua no ha violado el derecho a la propiedad en relación con el artículo 13 y 1.1 de la Convención.

### **5.3.5) Chirilagua no violó el artículo 24 en relación con los artículos 13 y 1.1 de la Convención**

77. El Estado rechaza la alegada violación del derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana. El mismo se analizará respecto de su posible configuración como medida indirecta de afectación del derecho a la libertad de expresión

---

<sup>95</sup> Corte IDH. *Caso Salvador Chiriboga*. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 55; y Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 120; Corte IDH.

(véase párrafo 84 *supra*). Esta Corte ha señalado que el contenido protegido del artículo 24 consiste en que los Estados se aseguren de no contar con legislación discriminatoria o que genere efectos de ese tipo<sup>96</sup>.

78. En el presente caso, ACOSINTI solicitó que se le otorgara una concesión para el uso del espectro electromagnético. La denegación de sus solicitudes no tuvo como objeto brindar un trato desigual, sino que se sustentó en las especiales características del espectro electromagnético a las que el Estado debe de atender por ser el administrador de dicho bien. Tal situación es inherente a la naturaleza de dicho bien y no a algún hecho que el Estado haya propiciado en especial, las características técnicas del bien escapan a la eficiente administración que el Estado pueda realizar<sup>97</sup>.

79. En primer lugar, debe indicarse que el espectro electromagnético es un bien de carácter limitado, por lo que, si no se realiza una correcta administración del mismo, se perjudicaría a aquellos que ya disponen de una concesión, así como a todos los usuarios que escuchan dichas radioemisoras. Ello ocurre puesto que el espectro electromagnético constituye un único bien que se otorga por porciones, teniendo como consecuencia que si se generan distorsiones por una concesión, estas puedan afectar a todas las demás.

80. En segundo lugar, debe destacarse que el otorgamiento de concesiones depende únicamente de cuestiones técnicas por las cuales el uso del espectro electromagnético pueda ser eficiente para todas las personas que quieran acceder a este. El Estado consideró que las condiciones técnicas del espectro electromagnético, en el momento en que se realizó el pedido, no permitirían disfrutar de dicho bien a ACOSINTI pues se podrían generar distorsiones en su transmisión.

---

<sup>96</sup> Corte IDH. *Caso de las niñas Yean y Bosico*. Consideraciones jurídicas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005, párr. 141. Serie C No 130; y Corte IDH. *Caso López Álvarez*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006, párr. 170. Serie C No 141.

<sup>97</sup> TEDH. *Gropera Radio AG and Others v. Switzerland*, judgment of 28 march 1990. § 61.

81. En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que, más allá de las solicitudes de ACOSINTI, el Estado otorgó efectivamente once concesiones para radios comunitarias<sup>98</sup>, con lo que se evidencia su plena voluntad de brindar un espacio de comunicación y difusión masiva a las comunidades.
82. Por ello, el no otorgamiento de la concesión no tuvo como subyacente contrariar el artículo 24 de la Convención, respecto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión<sup>99</sup>. Pues con dicha acción se estaría incumpliendo con normas perentorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por pertenecer al *jus cogens*<sup>100</sup>.
83. Finalmente debemos señalar que pese a que el peticionario de las concesiones fue ACOSINTI, no hay persona natural constituida como parte en este proceso, lo que se configura también respecto de la supuesta vulneración al derecho a la propiedad analizada en el acápite supra. Sin embargo; aún cuando la Corte considere que podría existir alguna víctima identificada se deberá atender a los argumentos de fondo planteados.
- Por los argumentos expuestos, solicitamos a esta Corte que declare que no ha existido violación alguna del derecho a la igualdad, en relación con los artículos 13 y 1.1 de la Convención.

## 6) Petitorio

Por las consideraciones expuestas anteriormente, el Estado solicita respetuosamente a esta Ilustre Corte que declare fundada la excepción de incompetencia *ratione personae* deducida, así como concluya y declare que no hay violación a los artículos 7, 8, 13, 21, 24, y 25 en relación al artículo 1.1 de la Convención Americana.

<sup>98</sup> Véase el Caso Hipotético, párr. 21.

<sup>99</sup> CIDH., Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión en Informe Anual de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008. OEA/Ser.L/V/II.134, doc. 5 rev.1, 25 de febrero de 2009, párr. 86.

<sup>100</sup> Corte IDH., *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes indocumentados*; Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, párr. 102-106 y Corte IDH. *Caso Yatama*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C No 127, párr. 184 -185.